Recomendación N°	32/2016
Autoridad Responsable	Secretaría de Seguridad Pública del Estado
Expediente	3VQU-088/2016
Fecha de emisión	21 de diciembre de 2016

HECHOS

Este Organismo Estatal recibió las denuncias que presentaron Q1 y Q2, sobre posibles violaciones a los derechos humanos que se cometieron en agravio de V1, V2 y V3, atribuibles a personal Directivo como elementos de la Policía Estatal en labores de apoyo al Centro Penitenciario de San Luis Potosí, por haberles obstaculizado su actividad profesional de asistencia jurídica en detrimento de las víctimas privadas de su libertad.

Q1, licenciado en derecho, precisó que el 19 de noviembre de 2015, acudió al Centro Penitenciario de San Luis Potosí para acceder al área de locutorios y entrevistarse con V1 y V2, por ser su defensor en el proceso penal que enfrentan; sin embargo, en el filtro de acceso un agente de la Policía Estatal le comunicó que no podía ingresar con saco y corbata ya que eran órdenes superiores. Q1 se identificó como abogado defensor, le explicó que durante el ejercicio de su profesión siempre ha vestido de esa forma, por lo que, al persistir la negativa del guardia de seguridad, solicitó audiencia con el entonces Director del Centro Penitenciario de San Luis Potosí, pero no lo recibió.

Por su parte, Q2, licenciado en Derecho, manifestó que el 13 de abril de 2016, acudió al Centro Penitenciario de San Luis Potosí, para entrevistarse con V3, ya que se practicaría una diligencia judicial dentro de su causa penal que se le sigue, y que era indispensable dialogar para establecer los términos de su defensa. Una vez realizados los trámites administrativos para ingresar, al dirigirse al filtro de revisión, un guardia de seguridad le indicó que no podía acceder con saco y corbata por órdenes del Director del Centro.

Derechos Vulnerados

- ✓ A la legalidad
- ✓ A una defensa adecuada

OBSERVACIONES

De las evidencias recabadas, se observó que el 19 de noviembre de 2015, Q1 al acudir al Centro Penitenciario de San Luis Potosí para entrevistarse con V1 y V2, sus representados, pero AR1, agente de la Policía Estatal le negó el acceso a la institución carcelaria, ya que de acuerdo al Reglamento Interior de los Centros Estatales de Reclusión de San Luis Potosí, no podía ingresar vestido con saco y corbata, por lo que se dirigió al área de gobierno de la penitenciaría para dialogar con AR3, en ese entonces Encargado de la Dirección del Centro, para darle a conocer lo ocurrido en el área de filtro, sin que fuera atendido.

El 13 de abril de 2016, Q2 acudió al Centro Penitenciario de San Luis Potosí para entrevistarse con V3, por estar próxima una diligencia judicial de la causa penal que se le instruye, no obstante, AR2, le prohibió el ingreso informándole que había una disposición de AR3, en cuanto restringir la entrada a quien vistiera saco y corbata; no obstante, se percató que en esos momentos ingresaron al Centro varias personas vestidas de la manera por la que se le negó la admisión. Preciso que en la entrada principal del edificio está colocada una manta en la que señala esa restricción para el ingreso

En este orden de ideas, mediante oficio SJ-14171/2015 del 11 de diciembre de 2015, AR3, Encargado de Despacho de la Dirección del Centro de Reinserción Social de San Luis Potosí, informó que no podía dar respuesta sobre los hechos en los que se vio involucrado Q1, ya que los responsables de la revisión corporal de las personas que ingresan al Centro carcelario pertenecían a la Dirección General de Seguridad Pública, por lo que la determinación para dicha revisión era exclusiva de esos elementos.

La Dirección General de Prevención y Reinserción Social a través del oficio DGPRS/UP-7451/2016, de 19 de septiembre de 2016, detalló que AR3, Encargado de la Dirección del Centro de Reinserción Social no conoció de los hechos de queja de Q1 y Q2, ya que en ese entonces quienes realizaban las labores de seguridad en el filtro de ingreso eran agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y no dependían de la Dirección a su cargo

Ahora bien, esta Comisión Estatal recabó diversa información que puso en evidencia el informe de la autoridad y obtuvo datos que permite acreditar que en el caso se vulneraron los derechos humanos de V1, V2 y V3, personas privadas de su libertad en el Centro Penitenciario de San Luis Potosí, como lo son certificaciones, inspecciones, declaraciones de quejosos y de víctimas.

En efecto, las manifestaciones planteadas por Q1 y Q2 se robustecieron con los testimonios de V1 y V2 quienes relataron tener conocimiento que en noviembre de 2015 a su defensor privado le fue impedida la admisión al Centro Penitenciario por su forma de vestir. Por su parte V3 señaló que el 13 de abril de 2016, tenía una diligencia dentro de su causa penal, enterándose que previo a esa fecha su abogado acudió al Centro de Reclusión y se le negó el acceso.

De las evidencias se obtuvieron datos que permiten acreditar que Q2, contaba con pase provisional que le fue entregado por la institución carcelaria el 13 de abril de 2016, como parte del protocolo para ingresar al Centro; con lo que se acreditó que el día de los hechos realizó el trámite ante el área de credencialización para su admisión al Centro Penitenciario, en efecto fue en el área de filtro y cacheo que AR2, agente de la policía estatal le indicó que no podía entrar vestido con saco y corbata, lo que denunció ante el Juez Segundo del Ramo Penal.

Además de lo anterior, de la inspección ocular realizada el 19 de septiembre de 2016, se constató que en la entrada principal del Centro Penitenciario de San Luis Potosí, se encuentra colocada una manta en la que se plasma el artículo 61 del Reglamento Interior de los Centros Estatales de Reclusión de San Luis Potosí, que en términos generales señala las restricciones para ingresar a ese Centro, asimismo un segundo párrafo relacionado a la prohibición en prendas de vestir; entre otras, de trajes y corbatas.

En el mismo sentido, es relevante destacar que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Dirección General de Prevención y Reinserción Social no especificaron en sus informes el funcionamiento operativo de los elementos de Seguridad Pública del Estado al estar asignados al área de filtro y cacheo en el Centro Penitenciario, menos aún detallaron si contaban con formación en temas penitenciarios, siendo preocupante que las autoridades se deslindaran de proporcionar un informe preciso y eficaz de los hechos como el nombre de los servidores públicos que negaron el acceso a Q1 y Q2, aún y cuando AR3, tuvo conocimiento de los hechos, al quedar documentado que le indicó a Q2, que solo permitían el ingreso a personas con saco y corbata porque asistirían a un evento al interior del Centro y en ese caso no aplicaba la restricción que al quejoso se le señaló, no

pasa desapercibido de igual forma que, en el oficio DGPRS/UP- 1531/2016 se reveló que AR3, si tuvo conocimiento sobre la presencia de Q1 el día de los hechos materia de queja, solo que no lo pudo recibir debido a encontrarse en sesión de Consejo Técnico Interdisciplinario.

Por lo anterior, es que el personal penitenciario y de apoyo, como ocurrió en el caso concreto, tienen el deber de facilitar la comunicación entre los acusados y sus abogados defensores, sin entorpecer las actividades profesionales de los postulantes en perjuicio directo de los internos para las consultas que deseen externar, ya que como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en los espacios destinados a la reclusión deben aplicar los mecanismos que inhiban la transgresión al derecho humano a una adecuada defensa.

El artículo 20 apartado B fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el derecho de la persona a una defensa adecuada por un abogado, quien tendrá la obligación de comparecer en todos los actos del proceso, cuantas veces se le requiera, lo que aplica al caso concreto toda vez que las víctimas contaban con sus abogados particulares Q1 y Q2 quienes tienen la obligación de informarles sobre las diligencias que se efectuarán dentro de su causa penal o algún otro acontecimiento involucrado con su estancia en la penitenciaria, la cual se vio restringido por el actuar de AR1, AR2 y AR3. En este aspecto cabe señalar que la Regla 61 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela) establece que el sistema penitenciario tiene la obligación de facilitar el tiempo e instalaciones adecuadas para que el interno reciba visitas de una asistencia jurídica, ya sea por un abogado de su elección o el que designe el Juez, y aquel podrá consultarlo sobre cualquier asunto jurídico sin demora interferencia o censura y en forma plenamente confidencial, lo que en el caso no sucedió

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Gire sus instrucciones a quien corresponda para que, sin menoscabo de la seguridad que debe prevalecer en el Centro de Reinserción Social, se garantice el derecho a la defensa y a la legalidad y seguridad jurídica de la población interna, y se elimine la práctica de prohibir el ingreso de los abogados defensores, en razón de la vestimenta de saco y corbata.

SEGUNDA. Colabore en la integración del Expediente Administrativo que inicie la Unidad de Asuntos Internos en contra de los servidores públicos AR1, AR2 y AR3, que participaron en los hechos, sobre la vista que realice este Organismo Autónomo, en razón de las consideraciones vertidas en la presente, así como por la falta de información que se solicitó, proporcionando la información que le sea requerida y tenga a su alcance.

TERCERA. Gire sus apreciables instrucciones al área que corresponda, a efecto de que como garantía de no repetición, respecto de las disposiciones establecidas en los diversos medios de difusión que utiliza la Dirección del Centro Penitenciario de San Luis Potosí para dar a conocer las restricciones contempladas en el Reglamento Interior de los Centros Estatales de Reclusión, sean acordes con la normatividad y con el pleno respeto de los derechos humanos.

CUARTA. Gire instrucciones para que se diseñe y aplique a los elementos de seguridad pública que auxilien o colaboren con el sistema penitenciario, un programa permanente de capacitación y adiestramiento respecto el contenido de la Ley Nacional de Ejecución Penal y Reglamento Interior de los Centros Estatales de Reclusión de San Luis Potosí, enviando a esta Comisión las constancias de cumplimiento.